



# Comunidades en resistencia al extractivismo: de la bioeconomía a los monocultivos y la minería

## Boletín del WRM 271

Agosto 2024

[Acceda al boletín en el sitio web](#)

[SUBSCRÍBETE](#)

# Tabla de Contenidos

NUESTRA OPINIÓN. Los proyectos de carbono son proyectos de muerte.....	3
La expansión descabellada de la palma aceitera en Papúa y la resistencia de la comunidad Kampung Bariat.....	6
El carácter destructivo de la bioeconomía y la lucha por el territorio en la comunidad Virgílio Serrão Sacramento, en Pará, Brasil.....	14
Orinoquía Colombiana: Entre el olvido, el extractivismo y la reserva agrícola.....	18
Camerún: ¡La resistencia contra la replantación de monocultivos de palma por parte de SOCAPALM es fértil!.....	25
Argentina: Lucha comunitaria frente a la contaminación de los aserraderos en Corrientes.....	27
DE LOS ARCHIVOS DEL BOLETÍN DEL WRM	
Para releer: Una reflexión desde África: hay que vencer el miedo para construir movimientos más fuertes.....	30
RECOMENDADOS	
Nueva publicación: Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: tácticas que utilizan las empresas de aceite de palma para apoderarse de las tierras comunitarias. Versión resumida.....	30
Argentina: Reclamo de justicia por el desalojo de familias campesinas por parte de Arauco.....	30
El proyecto de desarrollo alimentario y energético en Merauke amenaza a los pueblos indígenas y los bosques de Papúa.....	31
RD Congo: Se reconoce el derecho de los indígenas Batwa a regresar a sus tierras ancestrales dentro del Parque Nacional Kahuzi-Biega tras décadas de lucha.....	31

## NUESTRA OPINIÓN

# Los proyectos de carbono son proyectos de muerte

**Este boletín revela varios casos en los que la expansión de los proyectos de carbono se ha convertido en parte integral del modelo extractivista, que ha estado destruyendo territorios y medios de vida de las comunidades durante largo tiempo. Por eso, compartimos artículos sobre las formas antiguas y nuevas de extractivismo y sobre cómo las comunidades continúan luchando para resistirlas.**

Del 9 al 11 de julio de 2024, miembros de pueblos indígenas, tradicionales, campesinos y afrodescendientes de la región amazónica y de América Central se reunieron en el territorio indígena Alto-Turiaçu, en el estado de Maranhão, Brasil. Este encuentro fue organizado por el Pueblo Ka'apor a través de su sistema organizativo ancestral llamado Tuxa Ta Pame.

Su objetivo era compartir experiencias y discutir los proyectos de carbono forestal, a menudo denominados proyectos REDD (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques). El número de este tipo de proyectos ha aumentado drásticamente en los últimos años, no solo en América Latina y la Amazonía sino también en África y Asia.

Este encuentro en el territorio Ka'apor se diferenció de otros encuentros que se han realizado sobre el mismo tema. Fue un espacio de y para activistas y grupos de comunidades en el que se compartieron experiencias, prioridades, preocupaciones y luchas de resistencia, sin la presencia de los promotores de proyectos de carbono.

Quienes participaron en el encuentro también decidieron hacer una declaración colectiva. En su declaración, primero aclaran que cuando hablan de REDD también abarcan proyectos “creados siguiendo la misma lógica de REDD (por ejemplo, proyectos de carbono forestal, proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, programas REDD jurisdiccionales implementados por gobiernos estatales o nacionales, y otros)”.

Luego analizan cómo los promotores de proyectos y programas de carbono forestal no se diferencian de otras empresas y actores que promueven el extractivismo. REDD en realidad es parte del mismo modelo que durante mucho tiempo se ha apropiado de sus territorios y ha destruido sus medios de vida, con apoyo del Estado. Los promotores de REDD utilizan las mismas tácticas que quienes promueven otros tipos de extractivismo, y tienen el mismo objetivo: el lucro. En este caso, su ‘mercancía’ son los ‘créditos de carbono’.

Los ‘créditos de carbono’, a su vez, alimentan la perpetuación del modelo extractivista, por lo que es más acertado llamarlos ‘créditos de contaminación’. Según la declaración, los proyectos REDD – que incluyen los programas REDD jurisdiccional o REDD gubernamental, financiados por gobiernos del Norte como Noruega, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos – “busca(n) un

mayor beneficio económico para su negocio [REDD] e incentiva(n) la deforestación, porque a mayor deforestación mayor negocio para las empresas que venden los bonos de carbono”. La declaración continúa diciendo que REDD “es un maquillaje verde”. Al igual que otras falsas soluciones a la catástrofe climática, que las llaman de ‘exploraciones de petróleo no convencionales’, ‘biocombustibles’, ‘minería responsable u oro verde’, ‘transición energética’, REDD “permite a las empresas seguir con sus negocios y contaminando”.

Debido a esta situación, los participantes del encuentro calificaron a los proyectos y programas de carbono forestal como un “proyecto de muerte”, en contraste con el “proyecto de vida, que es el que llevamos adelante los pueblos y comunidades a través del respeto y cuidado de nuestros territorios”.

Los artículos de este boletín revelan la situación que se vive en varias regiones donde la expansión de los proyectos de carbono se ha convertido en una parte integral del modelo extractivista. Dado que este modelo ha estado destruyendo los medios de vida y los territorios de las comunidades durante mucho tiempo, compartimos artículos sobre las formas antiguas y nuevas de extractivismo en los territorios de las comunidades.

Por ejemplo, en el departamento de Vichada, Colombia, los impactos de la minería, los monocultivos y otras formas de extracción se están agravando con la introducción de proyectos de carbono, que incluyen a las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono.

El territorio de Papúa es actualmente una importante frontera mundial para la expansión de la palma aceitera industrial y la deforestación. Asimismo, es el territorio de cientos de pueblos indígenas diferentes. Un artículo de este boletín describe la resistencia de uno de estos grupos. También describe cómo el gobierno de Indonesia no solo permite la expansión de la palma aceitera a gran escala sino que también permite que las empresas utilicen parte de la zona que han recibido en concesión, para la venta de créditos de carbono.

En Corrientes, Argentina, la comunidad lucha contra los impactos de los aserraderos que rodean sus viviendas, resultado de la existencia de miles de hectáreas de monocultivo de eucaliptos y pinos en la región. Una encuesta realizada por la comunidad sobre los impactos de estos aserraderos en su salud demuestra que es inviable mantenerlos cerca de sus casas, además de denunciar el propio modelo de monocultivo de árboles, impuesto en la región por las empresas con el pleno apoyo del Estado.

Otro artículo relata la importante victoria de las comunidades de Edéa, en Camerún, que se movilizaron para impedir que la empresa SOCAPALM, que promueve monocultivos de palma aceitera en la región, replantara las zonas circundantes a las comunidades. En un comunicado, una asociación de mujeres de Edéa declaró: «No aceptamos permanecer en la miseria durante los próximos 50 años. Estamos decididas a luchar para liberar nuestra tierra y conseguir espacios vitales para nuestros hijos, las generaciones actuales y futuras.»

Otro artículo, relata la lucha campesina en Pará, Brasil, donde en 2025 se llevará a cabo la conferencia anual de la ONU sobre el clima. El gobierno del estado de Pará utiliza este escenario para promover la idea de una 'bioeconomía' o 'economía de la vida' como la solución a las crisis del clima y de la deforestación. Sin embargo, esta 'bioeconomía' –que se basa en plantaciones industriales de palma aceitera para la producción de biodiesel y otros productos– en realidad está destruyendo los territorios y los medios de vida de las comunidades campesinas. Y esto está ocurriendo en connivencia con el gobierno de Pará.

Este último ejemplo resume las palabras finales de la Declaración antes mencionada, que destacamos aquí: “Desde la colonización nos han venido matando. Actualmente, son las empresas petroleras, mineras, del agronegocio, hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura, y los proyectos de compensación de carbono como REDD, que junto a políticas de los Estados, continúan con el etnocidio de nuestros pueblos, matando nuestras culturas, lenguas, identidades, saberes y conocimientos. Decimos ¡BASTA! ¡NO a REDD!”

## La expansión descabellada de la palma aceitera en Papúa y la resistencia de la comunidad Kampung Bariat

**Al igual que lo hicieron los colonizadores holandeses en el pasado, el gobierno, las empresas y los inversionistas de Indonesia consideran que la tierra de Papúa es un vasto territorio vacío, una nueva frontera para la extracción y la especulación. Sin embargo, la tierra de Papúa no está vacía sino que es el hogar de cientos de Pueblos Indígenas, entre ellos los hombres y las mujeres de la aldea de Kampung Bariat, quienes luchan por garantizar el control de su territorio ancestral y mantenerlo libre de plantaciones de palma aceitera.**

Una noche de octubre de 2023, decenas de mujeres de Kampung Bariat, una aldea en el distrito de Kondo, Regencia de Sorong, provincia de Papúa Occidental, se reunieron en el centro de su comunidad para una actividad que implicó compartir y catalogar las diferentes formas en que utilizan y se relacionan con el bosque. Éstas formas son esenciales para sus tareas de cuidado que incluyen alimentar y garantizar la salud y el bienestar de sus familias y comunidad. Con la luz de tan solo unas pocas bombillas escribieron y compartieron conocimientos tradicionales sobre lugares de particular importancia que rodean a su comunidad, como por ejemplo lugares donde se puede encontrar un buen sagú –un alimento básico de la comunidad–, lugares para plantar ciertos cultivos, lugares para recolectar determinadas hierbas, raíces y hojas medicinales, sitios sagrados, etcétera. Fue una actividad alegre que reveló la profunda y fuerte conexión que las mujeres tienen con su territorio.

Pero el motivo para hacer esta actividad no fue nada alegre. En 2014, el gobierno indonesio en Yakarta decidió otorgar una concesión de 37.000 hectáreas en el sur de Sorong a PT Anugerah Sakti Internusa, una filial del grupo Indonusa Agromulia (1). Los permisos posteriores de las autoridades de Papúa autorizaron a la empresa a comenzar a destruir 14.467 hectáreas dentro de esta zona de concesión (que en ese momento estaba conformada por un 96% de bosque intacto) y plantar millones de árboles de palma aceitera (2). El futuro de la aldea de Kampung Bariat se ve amenazado porque la concesión se superpone con su territorio. No se informó a la comunidad y mucho menos se le pidió que diera su opinión o consentimiento para la concesión.

Aquella noche especial de octubre, las mujeres de Kampung Bariat también hablaron de la empresa. Enojadas por la situación, declaran: “¡Necesitamos que la palma aceitera no entre!” y “¡Somos capaces de cuidar nuestro territorio!” Las aproximadamente 300 mujeres y hombres de Kampung Bariat han cuidado su territorio durante generaciones, desde que diez clanes familiares se unieron y se establecieron en esta zona. Se identifican como Tehit, un grupo indígena perteneciente al pueblo Afsya.

## **Expansión industrial de la palma aceitera en Papúa e Indonesia**

Según cifras oficiales, hay alrededor de 16 millones de hectáreas de plantaciones industriales de palma aceitera en Indonesia, aproximadamente la mitad de la cantidad total mundial. Sin embargo, Sawit Watch, una ONG indonesia que monitorea el sector de la palma aceitera, estima que el área total de plantaciones de palma aceitera en Indonesia se acerca a los 25 millones de hectáreas (3), y advierte que en el futuro se agregarán millones de hectáreas más. En 2023, estas plantaciones en Indonesia crecieron 116.000 hectáreas, un aumento del 54 por ciento en comparación con 2022 (4).

Junto con las islas de Kalimantan, Sulawesi y partes de Java, Papúa está destinada a convertirse en la nueva frontera para la expansión masiva de la palma aceitera en Indonesia y en todo el mundo. Esto se debe a su vasto territorio y a las condiciones que el gobierno indonesio ofrece a las empresas e inversionistas del país. Estas condiciones se han vuelto cada vez más favorables, facilitadas en parte por la ley ómnibus (5). Papúa es el objetivo de muchos más megaproyectos mineros, plantaciones de caña de azúcar, proyectos agrícolas a gran escala llamados “polígnos alimentarios” y el antiguo proyecto hidroeléctrico Mamberano, todos los cuales causarían impactos devastadores. No es casualidad que Papúa, con sus vastos “recursos naturales”, fuera el último territorio sobre el que los colonizadores holandeses intentaron mantener el control, pero tuvieron que renunciar debido a la presión internacional (6).

La justificación legal que ha utilizado el gobierno central de Yakarta para entregar tierras de bosques a empresas de palma aceitera y otras empresas extractivas en Papúa se basa en una decisión del Ministerio de Agricultura adoptada durante el régimen de Suharto (nº 820/1982). Declaró que los aproximadamente 41 millones de hectáreas de superficie boscosa de Papúa eran “bosques estatales”, lo que quitó a los Pueblos Indígenas el poder de gestionar y tomar decisiones sobre los territorios que tradicionalmente ocupan y de los que dependen.

### **Una expansión descabellada**

Tanto el gobierno holandés del pasado como el posterior gobierno indonesio afirmaron ser los “dueños” de Papúa, ignorando por completo la presencia de las comunidades indígenas que ya estaban allí. Actuaron como si fuera tierra vacía y sin uso, de la que los intereses capitalistas pudieran sacar provecho. Sin embargo, una investigación de la organización Pusaka reveló la presencia de al menos 10.472 aldeas en Papúa, habitadas principalmente por Pueblos Indígenas. El informe agrega que todas estas comunidades dependen de un territorio más amplio, el cual administran de acuerdo con sus prácticas, costumbres y creencias. (7). La mayor área dada en concesión para el desarrollo de palma aceitera es el llamado proyecto Tanah Merah, en la Regencia Boven Digoel, provincia de Papúa del Sur. Siete empresas controlan la zona, que cuenta con un total de 280.000 hectáreas. Este proyecto viola el territorio donde reside el Pueblo Awyu y del que depende (8).

Los 29 millones de hectáreas totales que abarcan las plantaciones industriales de palma aceitera en todo el mundo tampoco estaban “vacías” cuando fueron ocupadas para esta actividad, sino todo

lo contrario (9). Existe una gran cantidad de experiencias bien documentadas de comunidades cuyas tierras fueron tomadas por empresas de palma aceitera. Sus experiencias (las historias de violencia que han experimentado, los abusos que han enfrentado las mujeres, la destrucción y la contaminación de la tierra y el agua) son sorprendentemente similares. Ésta es la razón por la que una nueva ronda de expansión de la palma aceitera a gran escala dirigida a Papúa resulta una idea tan descabellada y absurda.

Algunos de los aspectos comunes a estas historias y experiencias de Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia, Nigeria, Guatemala, Papúa Nueva Guinea, Costa de Marfil, Honduras, Brasil, Ecuador, Camerún y muchos otros países son los siguientes:

- Los territorios de las comunidades indígenas y negras son los más codiciados, en violación de sus derechos territoriales y medios de vida. En la tierra de Papúa, por ejemplo, la expansión de la palma aceitera ha provocado en todos los casos conflictos con las comunidades indígenas. Para 2018, 272.000 hectáreas de superficie, principalmente bosques, en Papúa se habían convertido en plantaciones industriales de palma aceitera, dejando tras de sí no solo un reguero de bosques destruidos sino también de medios de vida destruidos (10).

- La palma aceitera industrial no sólo se apropia de la tierra sino también del agua. En Kalimantan Occidental se ha apropiado de más tierra y agua para la producción de palma aceitera industrial que en cualquier otro lugar del planeta. Una investigación realizada en ese lugar reveló que hubo apropiación a gran escala, alto nivel de contaminación y cuantiosa destrucción del agua a lo largo de la cadena de producción de aceite de palma, lo que afecta a toda la región y a su población. Sin agua nadie sobrevive (11).

- El aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más barato a escala mundial debido a la feroz explotación laboral de quienes anteriormente encontraban su sustento en el bosque, la agricultura y la pesca. Las ganancias de las empresas de palma aceitera se refuerzan aún más con la explotación y el control de los cuerpos de las mujeres. Cuando la palma aceitera industrial invade un territorio comunitario, la vida de las mujeres se vuelve extremadamente dura. Cuando se destruye un río, por ejemplo, esto tiene profundas consecuencias para ellas. Debido a la división sexual del trabajo existente, en la que las mujeres son quienes sustentan la vida, los impactos destructivos de la palma aceitera profundizan la opresión de las mujeres. Las empresas también explotan el trabajo de las mujeres en las plantaciones. En este contexto, se generaliza la prostitución y la violencia sexual contra las trabajadoras (12).

- Incluso cuando hay pruebas de contaminación del agua u otras violaciones de derechos, las empresas de palma aceitera gozan de total impunidad. Mientras tanto, los activistas de las comunidades que dicen NO a las plantaciones industriales de palma aceitera y defienden sus derechos en su territorio deben hacer frente a la intimidación, amenazas de muerte, criminalización, acusaciones de terrorismo y prisión.

- Las certificaciones de 'control de calidad' como RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible), creado hace 20 años, se han convertido en instrumentos de maquillaje verde para la industria de la palma aceitera. Estas certificaciones no cambian los patrones estructurales de

injusticia, violencia y destrucción, y sus sistemas internos de queja tampoco cambian el comportamiento de las empresas en la práctica. Lo que sí garantizan estos instrumentos son ganancias para los productores de aceite de palma, inversores, comerciantes y empresas manufactureras (13). Estos instrumentos y certificaciones también tienen la responsabilidad compartida de las múltiples opresiones provocadas por las industrias extractivas en el Sur Global.

Hoy en día, los “biocombustibles” o “agrocombustibles” derivados del aceite de palma se venden al público como “energía renovable” y parte de la llamada “transición energética”. Ésta es la última mentira que la industria del aceite de palma ha difundido para justificar su expansión masiva. Ya en 2013, una investigación de la organización GRAIN reveló que el actual sistema alimentario dirigido por la agroindustria, en el que el sector de la palma aceitera es un actor clave, es responsable de aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (14).

### **Kampung Bariat y otras comunidades se defienden**

De vuelta en Kampung Bariat, otra noche de octubre de 2023, la comunidad se reunió para ver el video de una visita que algunos miembros de la comunidad habían hecho a Yakarta, la capital de Indonesia, a unos 3.000 kilómetros de distancia. Las imágenes mostraban a los aldeanos expresando sus preocupaciones a diferentes autoridades de Yakarta. Yuliana Kedemes, una de las participantes en la visita, resumió su mensaje en una entrevista: “No podemos permitir que [las empresas palmicultoras] vengan aquí, porque si lo hacen ¿dónde vivirán nuestros hijos y nietos en el futuro?”.(15)

Al día siguiente, la comunidad recibió a las autoridades de la regencia de South Sorong y del distrito de Kondo. Fueron recibidos en lengua tehit por representantes de los diez clanes, quienes contaron la historia de cómo se fundó Kampung Bariat. Entregaron a las autoridades un expediente con documentación y un mapa que muestra la profunda conexión que tienen mujeres y hombres con su territorio. Afirmaron que necesitan un mínimo de 3.200 hectáreas de tierra para garantizar la supervivencia de su comunidad. Las autoridades manifestaron que apoyarían las demandas del pueblo de Kampung Bariat. La lucha de Kampung Bariat y de muchos otros Pueblos Indígenas de Papúa contra las amenazas actuales de la palma aceitera recibió un apoyo sin precedentes cuando, en abril de 2021, el regente de Sorongse revocó las licencias otorgadas a cuatro empresas de palma aceitera. Para ello se basó en una auditoría iniciada en 2018, que identificó violaciones jurídicas y administrativas por parte de las empresas. En junio de 2021 se revocaron las licencias de otras 12 empresas en el sur de Sorong, entre ellas las licencias de PT Anugerah Sakti Internusa, la empresa cuya concesión se superpone con el territorio de Kampung Bariat (16). Sin embargo, PT Anugerah Sakti Internusa acudió a los tribunales en diciembre de 2021 para impugnar la decisión, en un intento por recuperar sus licencias.

Hay más Pueblos Indígenas de Papúa que iniciaron casos judiciales. En el caso de la zona de desarrollo de palma aceitera más grande de Papúa, el proyecto Tanah Merah, el pueblo Awyu lucha por sus derechos en los tribunales, incluso ante la Corte Suprema. En mayo de 2024, los

pueblos indígenas Awyu y Moi viajaron a Yakarta, donde realizaron oraciones, rituales y danzas para exhortar a la Suprema Corte a que evitara la destrucción de sus tierras (17).

Parte de lo que los Pueblos Indígenas de Papúa señalan al gobierno central es el abandono generalizado de las concesiones por parte de las empresas de Papúa. Una investigación de Pusaka reveló que desde 1988 hasta 2011 (cuando se emitió una moratoria presidencial sobre la tala de bosques), sólo 125.284 hectáreas de las 1.162.893 otorgadas a 51 empresas de palma aceitera (10,7% del área) habían sido realmente convertidas a palma aceitera. Mientras tanto, varias de estas empresas habían cesado sus actividades. Si se incluyen también las concesiones madereras y de plantaciones para obtención de madera, la cantidad de tierra abandonada, considerando las concesiones otorgadas durante este período de 1988-2011, asciende a 1.925.306 hectáreas. Los Pueblos Indígenas reclaman que el gobierno debería devolverles estas tierras ya que son su territorio ancestral, así como reconocer sus derechos territoriales (18).

### **Extractivismo “verde”**

En lugar de responder a los reclamos legítimos de los Pueblos Indígenas, el gobierno indonesio permite la expansión de otro tipo de extractivismo en Indonesia, con todo el acaparamiento de tierras y la especulación que conlleva: el extractivismo “verde” de proyectos y programas de carbono forestal. En los últimos años, desde el Acuerdo de París por el Cambio Climático, la demanda de créditos de carbono se vio impulsada por el frenesí de las grandes industrias contaminantes para volverse “carbono neutras”. En realidad, al comprar esos “créditos” estas industrias contaminantes pueden continuar con sus actividades e incluso aumentar la quema de combustibles fósiles, que es la principal causa del caos climático. Por eso los “créditos de carbono” deberían llamarse “créditos de contaminación”.

Este mercado de carbono redunda en el interés del gobierno indonesio: ya ha recibido decenas de millones de dólares estadounidenses del Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima y los gobiernos de países industrializados como Noruega, Alemania, Japón y el Reino Unido para convertirse en “Listo para REDD”. Esto significa implementar la “infraestructura” necesaria, tal como una legislación favorable y métodos para supuestamente medir y verificar la cantidad de carbono en los bosques de Indonesia, el cual se compara con las cantidades de referencia definidas por el gobierno y los propios donantes (19).

Además de ser una oportunidad para la llamada “industria de la conservación” –como lo son organizaciones como The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI) y World Wildlife Fund (WWF)– de aumentar las “áreas protegidas”, el negocio del carbono en Papúa también se ha convertido en una nueva oportunidad para industrias extractivas como las plantaciones de palma aceitera y las empresas madereras. Pero su nuevo negocio está agravando el caos climático y haciendo más difícil la lucha de los Pueblos Indígenas por sus derechos territoriales.

---

## **El mercado y el comercio de carbono: una nueva oportunidad para las industrias extractivas, una nueva amenaza para los Pueblos Indígenas de Papúa**

Las empresas de aceite de palma y otras empresas de Papúa pueden aprovecharse ahora de una nueva fuente de ingresos. En lugar de destruir los bosques para la actividad maderera o la palma aceitera, pueden dejar el bosque “en pie” y seguir ganando dinero, vendiendo un nuevo producto llamado “créditos de carbono” –a partir de la promesa de que mantendrán el bosque intacto en lugar de talarlo. El gobierno de Indonesia permite a las empresas de la categoría de concesión PBHP (Permiso de Negocio de Utilización Forestal) utilizar las zonas de concesión para más de una actividad comercial, que puede incluir créditos de carbono. El Grupo ALS (grupo Alamindo), por ejemplo, propietario de tres empresas e industrias madereras en Papúa, pretende establecer un negocio de carbono a través de PT Rimbakayu Arthamas, en colaboración con otras nueve empresas, haciendo uso de este tipo de permiso (20).

En Brasil, las empresas de palma aceitera entraron en el mercado del carbono de una manera similar, al tiempo que perjudicaban a las comunidades indígenas aún más de lo que ya lo hacían. La empresa Agropalma, en el estado de Pará, en la región amazónica, está utilizando tierras de bosque (no dedicadas al cultivo de palma aceitera) para vender “créditos de carbono”. Estos “bosques de carbono” están “protegidos” por guardias fuertemente armados que persiguen a las comunidades indígenas Turiwara y afrodescendientes llamadas quilombolas. Estos pueblos siempre tratarán de entrar al bosque porque es su territorio ancestral, donde se encuentran sus cementerios y lugares para pescar y cazar (21). Con el reciente proyecto de carbono forestal, su lucha de larga data para recuperar estas tierras se ha vuelto aún más difícil.

---

En todo el mundo, 17 años de experiencia en proyectos de carbono forestal y otros proyectos llamados de tipo REDD han demostrado que allí donde avanza el negocio del carbono se debilita la lucha de las comunidades indígenas por sus derechos territoriales. Esto ocurre a pesar de que los promotores y partidarios de los proyectos de carbono afirman y prometen que los proyectos harán avanzar y mejorarán los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas (22). Lo que es peor, los proyectos de carbono hacen poco por revertir la deforestación y exacerban el caos climático, lo que en última instancia afectará negativamente a los bosques tropicales y, por lo tanto, a los Pueblos Indígenas. Según las investigaciones, la selva amazónica está en un proceso de rápida “desección”. Podría convertirse en una gran sabana en un futuro próximo si los gobiernos, en particular de los países industrializados, no deciden rápidamente detener la extracción de combustibles fósiles (23).

### **Observaciones finales**

El gobierno indonesio ya no puede ignorar la existencia de pueblos indígenas en la tierra de Papúa, cuyas delegaciones visitan regularmente sus oficinas en la capital, Yakarta. Entregar sus tierras a empresas privadas y permitir que éstas las destruyan o practiquen el extractivismo “verde” está en abierta violación del artículo 33 de la Constitución de Indonesia, que establece que

aunque la tierra pertenece al Estado, debe “utilizarse en la mayor medida posible para la prosperidad del pueblo indonesio”. En una reciente entrevista con Al Jazeera, el presidente electo de Indonesia, Prabowo, llegó a afirmar: “Los intereses, la seguridad y el futuro de todos los Pueblos Indígenas son la máxima prioridad. Tenemos que protegerlos, tenemos que asegurar sus medios de sustento” (24).

Pero asegurar sus medios de sustento significa garantizar que puedan ejercer libremente el control sobre sus territorios. Esta demanda ha sido sistemáticamente ignorada por el gobierno. Por lo tanto, es fundamental fortalecer la lucha de resistencia. Esto puede ocurrir a través de procesos de aprendizaje horizontales que conecten a las comunidades de todo el mundo, de modo que puedan compartir su amplia diversidad de experiencias de resistencia contra tales plantaciones. Un ejemplo de ello es la alianza informal contra la expansión industrial de la palma aceitera en África occidental y central, que desde 2016 conecta a comunidades que luchan por recuperar sus tierras de manos de las empresas de palma aceitera en varios países africanos (25). Conectar las luchas contra la palma aceitera y otras amenazas extractivas podría ser un elemento clave para fortalecer la actual lucha de las comunidades de Papúa para defender sus territorios.

### **Secretariado Internacional del WRM**

- (1) <https://awasmiffee.potager.org/uploads/2015/04/atlas-sawit-en.pdf>
- (2) [Spurred by investor-friendly law, palm oil firms sue to get licenses back, Monagbay](#), enero 2022.
- (3) Sawitwatch. Catatan&Proyeksi perkebunan sawit Indonesia tahun 2023, 2023
- (4) [Nusantara Atlas, 2023 Marks a Surge in Palm Oil Expansion in Indonesia, enero 2024](#)
- (5) [Boletín WRM, Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”](#), enero 2021.
- (6) Después de que el gobierno de Indonesia asumiera el poder, la primera inversión extranjera aprobada para Papúa en 1967 abrió las puertas para que Freeport Sulpur Inc. extrajera mineral de lo que se considera una de las mayores reservas de oro del mundo, con impactos devastadores sobre las comunidades, que continúan hasta el día de hoy.
- (7) [Documento informativo: Karena ada Hutan Tong Hidup](#), Jakarta, 2023
- (8) [The Awyu Tribe Fights the “Tanah Merah Project” Companies Up To the Supreme Court, Pusaka, marzo 2024.](#)
- (9) [La palma de aceite en América Latina: monocultivo y violencia, GRAIN](#), marzo 2024.
- (10) [CIFOR, Drivers of forest loss in Papua and West Papua.](#)
- (11) [Toxic river. The fight to reclaim water from oil palm plantations in Indonesia, December 2020, Kruha et al,](#)
- (12) [WRM, Romper el silencio: hostigamiento, violencia sexual y abuso contra mujeres dentro y alrededor de plantaciones de caucho y palma aceitera, marzo 2019 y Rape, abuses in palm oil fields linked to top cosmetic brands: AP, Al Jazeera News, noviembre 2020](#)
- (13) Ver, por ejemplo: [Latin American Palm Oil Linked to Social Risks, Local Deforestation, Chain Reaction Research, diciembre 2021](#) o [Who’s funding palm oil?, Mongabay, marzo 2015.](#)
- (14) [How much of world’s greenhouse gas emissions come from agriculture?, GRAIN, octubre 2014.](#)
- (15) Ibid 2
- (16) Ibid
- (17) [Land Back: Supreme Court Ceremonial Venue for Papuan Indigenous Peoples Fighting Palm Oil Companies, Pusaka](#), marzo 2024. Hasta ahora, sólo siete comunidades han asegurado el control sobre sus tierras mediante el uso de una categoría jurídica creada mediante cambios en la Ley de Bosques de 2012. Se

trata de los llamados ‘bosques consuetudinarios’ y suman 39.841 hectáreas. Es un paso importante, aunque insignificante al mismo tiempo, si se compara con las áreas entregadas a las empresas, empresas que tienen un gran impacto en los medios de vida y amenazan el futuro de los pueblos indígenas.

(18) [Documento informativo: Karena ada Hutan Tong Hidup](#), Jakarta, 2023

(19) Indonesia REDD+ National Strategy 2021-2030; Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, noviembre de 2022

(20) [Pusaka, The Moi Tribe Opposing Timber Corporate Giants](#), julio 2023.

21) [Boletín WRM, REDD y la Economía Verde agravan las opresiones y la deforestación en Pará, Brasil](#), julio 2023.

(22) [WRM, 15 años de REDD. Un mecanismo intrínsecamente corrupto](#)

(23) [The Scientist, Amazon Rainforest Nearing Savannah “Tipping Point”](#), marzo 2023

(24) [Al Jazeera, Indonesia's Prabowo: Victory, controversies and hopes](#), mayo 2024

(25) Ver la declaración de la última reunión de esta Alianza Informal contra la Expansión de las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera en África Occidental y Central, en 2022, [aquí](#).

## **El carácter destructivo de la bioeconomía y la lucha por el territorio en la comunidad Virgílio Serrão Sacramento, en Pará, Brasil**

**La empresa de monocultivos de palma aceitera Brasil Bio Fuels (BBF) amenaza con desalojar a familias campesinas, con la complicidad del gobierno del estado de Pará. En este artículo se demuestra que la 'bioeconomía', de la que tanto se habla, no es 'sostenible' ni 'limpia'. Lo que hace es destruir los territorios de las comunidades, como lo hacen desde hace tiempo las industrias que promueven el extractivismo basado en los combustibles fósiles.**

El 6 de junio de 2024, el juez André Luiz Filo-Creão Garcia da Fonseca, de la Sala Agraria de Castanhal, estado de Pará, en la región norte de Brasil, emitió una orden de recuperación en favor de la empresa de monocultivo de palma aceitera Brasil Bio Fuels (BBF). Su decisión supone el desalojo inmediato de 38 familias campesinas pertenecientes a la comunidad Virgílio Serrão Sacramento. En su sentencia, advirtió a las familias que si no abandonan voluntariamente el terreno, la Policía Militar de Pará deberá ejecutar la decisión mediante el uso de la fuerza. Por el momento, las familias están a la espera de una notificación formal de desalojo.

El asentamiento Virgílio Serrão Sacramento surgió a finales de 2015, después de que decenas de familias se unieran en el municipio de Mojú, al noreste del estado de Pará, en la región Amazónica, para recuperar una zona de aproximadamente 700 hectáreas de la que fueron expulsadas en el pasado por madereros y terratenientes. Las familias se movilizaron ante la amenaza de que BBF se apoderara de la zona como parte de su proyecto de expansión del monocultivo de palma aceitera en la región. Además, estaban conscientes de que las 700 hectáreas recuperadas son tierras públicas, pertenecientes al estado de Pará. Y, según establece la Constitución del país, esas tierras deben cumplir su función social, lo que significa beneficiar a las familias campesinas y no a compañías privadas como BBF.

Pero eso no es lo que pasa en Pará. Poco después de recuperar el territorio en 2015, las familias solicitaron ante el ITERPA, el Instituto de Tierras de Pará, la regularización de las tierras. Sin embargo, durante años el ITERPA no ayudó a las familias, a pesar de comprometerse más de una vez a llevar a cabo un estudio sobre el área. Cuando BBF acudió a los tribunales en 2019 para reclamar la posesión del terreno, el ITERPA se lavó las manos bajo el argumento de que ya no podía hacer nada porque el caso estaba judicializado. En 2020, la empresa obtuvo la primera orden judicial a su favor, en la que se ordenaba el desalojo de las 38 familias de la zona.

Sin embargo, según las familias, BBF actuó de mala fe, al presentar al juez títulos de propiedad improcedentes. La defensa de las familias interpuso un recurso y consiguió anular la medida cautelar de desalojo. Sin embargo, a mediados de 2023, BBF obtuvo de nuevo una medida cautelar a su favor. En ese momento, el caso pasó a la Comisión de Resolución de Conflictos por la Tierra del Poder Judicial del estado de Pará. Pero no se llegó a un acuerdo porque las familias campesinas, seguras de su legítimo derecho a las 700 hectáreas, no estaban dispuestas a ceder ni

un centímetro de su territorio. Ante la falta de acuerdo, el caso volvió a estar en manos del juez, quien, como ya se ha dicho, decidió conceder las tierras a BBF para que lleve a cabo su proyecto de monocultivo de palma aceitera.

El Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) de Pará, que forma parte de La Vía Campesina, una organización internacional en defensa de las y los campesinos en todo el mundo, denunció en un comunicado que "no es justo ni moral favorecer a una empresa que viola derechos en detrimento de 38 familias que producen alimentos".

Las familias de la comunidad cultivan sus huertos con una gran variedad de alimentos que no solo alimentan a sus familias, sino que también benefician a la población local. En los casi nueve años de ocupación, construyeron sus casas, crearon y recuperaron sus vínculos con el territorio. Desde 2020, y especialmente en el momento presente, sufren constantes amenazas de desalojo, como señala uno de los habitantes: "Mi hermano llora como un niño, tenía toda la zona preparada para plantar sandías cuando nos dieron esa noticia, llevo tres días sin poder dormir". (1)

## **La elección del gobierno de Pará por la 'bioeconomía' y el agronegocio de la palma aceitera**

El gobierno de Pará, encabezado por el gobernador Helder Barbalho, ha elegido actuar para maximizar los beneficios privados de una empresa como BBF y de otras empresas del sector del aceite de palma en detrimento de las comunidades campesinas. Una decisión que no sorprende a nadie, ya que el gobernador habla todo el tiempo de la 'bioeconomía', en la que el aceite de palma se considera una de las 'energías renovables' estratégicas en las que se basa la 'bioeconomía' del estado brasileño.

La participación del gobernador de Pará en un evento celebrado en abril de 2023 en Londres, en compañía de Milton Seagall, director ejecutivo de Brasil Bio Fuels, es un ejemplo de sus esfuerzos para favorecer las actividades de la compañía. En su intervención en el evento, Barbalho expresó: "Animo a los asistentes a tener en cuenta esta nueva actividad económica [la bioeconomía] en nuestro país. La bioeconomía, basada en inversiones en innovación, tecnología e investigación, permitirá impulsar nuevos negocios. Ciertamente, si observamos las ventanas de oportunidad globales, nos damos cuenta de lo oportuna que es la bioeconomía como agenda, ya que permitirá poner en diálogo los negocios con el mundo, y, sobre todo, con su biodiversidad. Como Brasil es el país de mayor biodiversidad tropical del planeta, no podemos desperdiciar la oportunidad". (2)

Barbalho se jacta de que Pará sea el primer estado de Brasil en tener un "plan de bioeconomía" (3). También afirma que este Plan se "construyó desde la escucha a los pueblos tradicionales y ancestrales". Pero en realidad fue elaborado por la ONG The Nature Conservancy (TNC). El diario The Washington Post denominó a TNC, que tiene su sede en Estados Unidos, como "el grupo ambientalista más rico del mundo". Es decir, se asemeja mucho más a una empresa que a una ONG. Además, TNC tiene sólidos vínculos con las élites del capital financiero internacional, con representación en su consejo directivo (4). De hecho, el Plan de Bioeconomía fue diseñado sobre

todo como una forma de atraer nuevos negocios, algo que también señaló Barbalho en su intervención durante el evento celebrado en Londres: “Hemos identificado, a partir de 43 tipos de productos [de la bioeconomía], la posibilidad de apalancar US\$ 120.000 millones en negocios”.

El monocultivo de palma aceitera es una de las principales actividades entre esos "negocios". En un vídeo divulgado en la página web de BBF, Barbalho sostiene que el estado de Pará tiene "vocación" para el monocultivo de palma aceitera para la producción de "biocombustible" y que la palma aceitera es una producción "limpia", "baja en carbono", y se enorgullece al decir que Pará ya es “el mayor productor [de palma aceitera] de Brasil”. (5)

## **La cara de la ‘bioeconomía’ del monocultivo de palma aceitera: destrucción y violencia**

Si ese es el futuro que el gobernador pretende presentar al mundo como anfitrión de la Conferencia sobre el Clima COP30, que se celebrará en Belém en 2025, entonces deberá enseñar a sus invitados los kilómetros de monótonas filas de palma aceitera, en medio de constantes aplicaciones de agrotóxicos que destruyen todo lo que no sea palma aceitera y contaminan el agua. Transitarán por un modelo que promueve injusticias y violaciones.

Esas monótonas filas de palma aceitera ocultan las historias de vida de comunidades como Virgílio Serrão Sacramento que buscan dar vida a la tierra, lo que les permite subsistir de forma digna. Otras familias indígenas y quilombolas de una región cercana, el Valle de Acará, se enfrentan a los mismos ataques de la expansión de los monocultivos de palma aceitera por parte de BBF y otras empresas como Agropalma. También se enfrentan a la misma negativa del Estado respecto a la regularización de sus tierras.

El único territorio indígena demarcado oficialmente por el Estado brasileño en el Valle del Acará, el Territorio Indígena Turê-Mariquita del pueblo Tembé, con sus 147 hectáreas, es el menor territorio indígena demarcado oficialmente en Brasil. Cansados de esperar una respuesta concreta por parte del Estado brasileño, pueblos indígenas y comunidades quilombolas han llevado a cabo desde 2021 varias acciones de recuperación de tierras. Se han organizado en el Movimiento IRQ (Indígena, Ribereño y Quilombola), luchando juntos por la demarcación de sus tierras.

Desde que empezaron a realizar esas acciones, las comunidades se enfrentan a prácticas violentas por parte de diversos grupos fuertemente armados, como la policía de Pará, guardias de seguridad, paramilitares de empresas privadas y bandas criminales. Se incrementó de forma alarmante la persecución, las amenazas de muerte, humillaciones e incluso el racismo por parte de algunos sectores de la población local contra los pueblos Tembé y Turiwara y las comunidades quilombolas, a los que se acusa de obstaculizar el desarrollo. Las sucesivas quejas y denuncias policiales presentadas por las comunidades ante los organismos competentes no han surtido efecto. (6)

Ante todo ello, queremos expresar nuestro total repudio a la decisión del juez André Luiz Filo-Creão Garcia da Fonseca en el caso y a la total inacción del gobierno del estado, que no ha

cumplido con su obligación de defender los derechos del pueblo de Pará, en este caso, las 38 familias del asentamiento Virgílio Serrão Sacramento.

Toda esa trama demuestra claramente que la 'bioeconomía', de la que tanto se habla, no es 'sostenible' ni 'limpia'. Lo que hace es destruir los territorios de las comunidades, como lo hacen desde hace tiempo las industrias que promueven el extractivismo basado en los combustibles fósiles.

### **Secretariado Internacional del WRM**

- (1) [Denuncia: 38 familias de agricultores familiares del MPA en Pará están siendo desalojadas por el estado de Pará y la compañía BBF, MPA, junio de 2024. \(en portugués\)](#)
- (2) [En una conferencia en Londres, el gobernador de Pará anuncia la concesión de áreas forestales para generar bonos de carbono, Globo, abril de 2023. \(en portugués\)](#)
- (3) [Helder Barbalho habla sobre la Zona Franca de Bioeconomía en Pará con el ganador del Premio Nobel, Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Gobierno de Pará, septiembre de 2023.](#)
- (4) [Boletín WRM, REDD y la Economía Verde agravan las opresiones y la deforestación en Pará, Brasil, julio 2023.](#)
- (5) <https://www.grupobbf.com.br/noticias/estados-da-regiao-norte-apostam-em-energias-renovaveis-para-atender-a-populacao/>
- (6) [Boletín WRM, La lucha por la tierra en la Amazonía brasileña contra las empresas mineras y de palma aceitera, febrero 2024.](#)

## Orinoquía Colombiana: Entre el olvido, el extractivismo y la reserva agrícola

**La Orinoquía va desde el piedemonte de la cordillera oriental hasta la frontera con Venezuela. Históricamente la región ha estado asociada a la explotación de caucho, maderas, pieles y otros llamados “recursos naturales” a costa de la explotación de las comunidades ancestrales. Hoy surgen nuevas amenazas bajo el paradigma de la conservación, las energías verdes y proyectos de carbono.**

La Orinoquía es una de las cinco regiones geográficas de Colombia, abarca los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada y parte norte del Guaviare. También conocida como Los Llanos, esta región comprende una gran diversidad ecosistémica y cultural, entre piedemonte, selva transicional, sabana, sabana inundable y ríos caudalosos, con gran variedad de fauna y flora, parte de ella en peligro de extinción.

Sobre la Orinoquía se ha desplegado la narrativa del “vacío” (1), de allí que su nombre común, “llanos”, refiera a lo plano, a lo inhabitado y salvaje. Sin embargo, en esta región se encuentra la diáspora de Pueblos Indígenas nómadas que ancestralmente habitaron la región y que ahora se ven confinadas dentro de algunos resguardos indígenas ya constituidos (2), y asentamientos aún no reconocidos por las entidades competentes del Estado (Ministerio del Interior). Poblaciones que en su mayoría han sido declaradas por la Corte Constitucional en riesgo de extinción física y cultural (auto 004). (3) Debido al etnocidio y racismo estructural del que han sido víctimas, actualmente no tienen los medios físicos ni culturales para pervivir. (4)

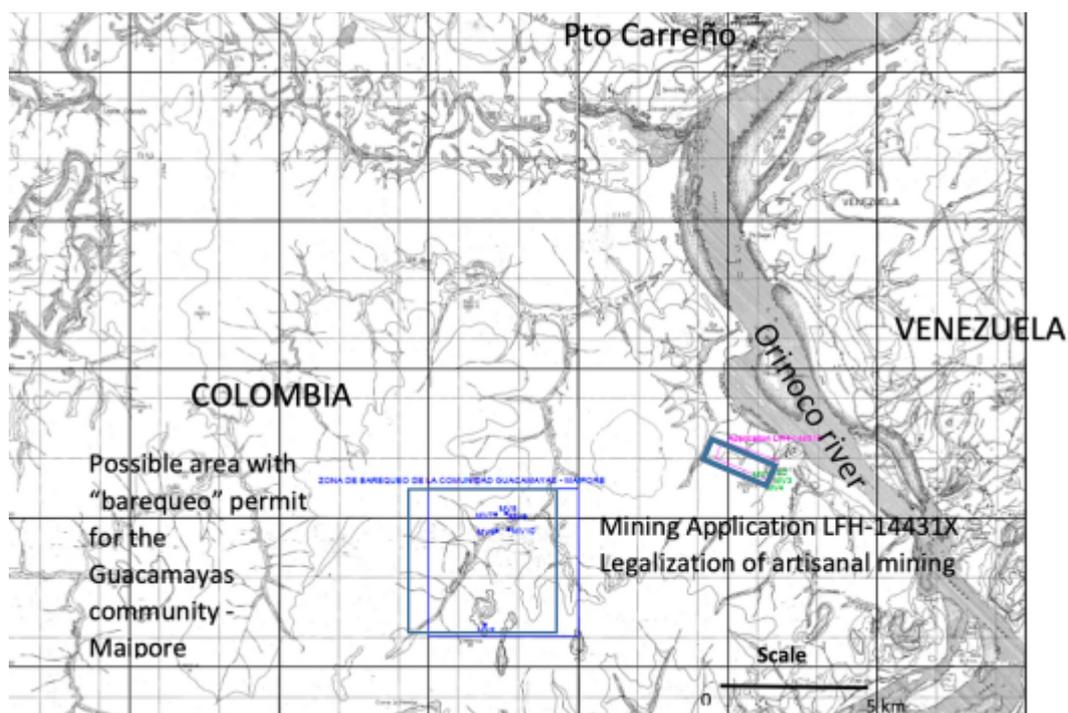
El estado colombiano sigue promoviendo la interpretación de este territorio como “vacío” y disponible como reserva agrícola. Para ello ha titulado el uso del suelo a grandes capitales nacionales y extranjeros sin tener en cuenta la existencia y participación de las comunidades en esas decisiones, ni aplicar un enfoque diferencial en este tipo de actividades y proyectos que tienen afectaciones directas a territorios y territorialidades indígenas.(5)

A la cultura ancestral de los pueblos se contraponen la violenta estrategia de desarrollo (6) que se actualiza en el territorio mediante programas de colonización dirigida, explotación de caucho, quina, añil o hidrocarburos, además de monocultivos y ganadería. A ello se suma la reciente designación de la región como “gran despensa agrícola” para expandir negocios de agroindustria, captura y compensación de emisiones de carbono, así como la minería de tierras raras.

En 2014, con la aprobación del documento CONPES 3797 (7)–, el Estado colombiano proyectó una porción de la Orinoquía, denominada altiplanicie, como zona de expansión agrícola, resaltando su potencialidad para proyectos de palmicultura y minería a gran escala. En este documento no se mencionan los Pueblos Indígenas, sus proyectos productivos, ni sus procesos organizativos.

Veamos tres ejemplos recientes de la intervención externa en el territorio.

## Vichada y minería: Arco minero de la Orinoquía



(Imagen de Auxico Resoruces <https://www.auxicoresources.com/colombia>)

Las reservas minerales en la Orinoquía colombiana tienen un alto valor en el mercado internacional debido a la presencia de minerales raros (8). En 2012, el Estado colombiano declaró y delimitó zonas del departamento del Vichada como Áreas Estratégicas Mineras (AEM) mediante la resolución 0045 de la Agencia Nacional Minera (ANM) (9). Sin embargo, esta resolución, junto con otras de similar naturaleza, fueron declaradas sin valor ni efecto por parte de la Corte Constitucional en 2015, debido a la vulneración de los derechos a la Consulta Previa, la diversidad cultural, la participación ciudadana y al territorio (10). Pero antes de esa decisión de la Corte, entre los años 2003 y 2012 fueron radicadas ante las autoridades 190 solicitudes de títulos mineros, con una extensión total de 895.908 hectáreas. Equivalente al 9% del departamento (11).

En 2022, la comunidad indígena del Resguardo indígena Guacamayas Maipore, en Vichada, empezó a expresar su preocupación por la explotación minera en su resguardo y en un área aledaña. En un proyecto de la multinacional Canadiense Auxico Resources, se negoció un predio colindante al Resguardo indígena que tenía un proceso de adjudicación de título de minería artesanal desde el año 2010. La Agencia Nacional Minera otorgó el título minero en 2023 y, en 2024, la autoridad ambiental (Corporinoquía) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para este proyecto. (12)

La multinacional asegura que tiene un acuerdo de entendimiento con el Resguardo de Guacamayas Maipore para hacer minería dentro del territorio.(13) Situación que es desmentida por la mayoría de los habitantes del Resguardo, quienes expresan que solo una persona firmó esos documentos sin la participación de la comunidad. Ahora temen que en unos años empiecen a explotar estos metales dentro del Resguardo, sin su consentimiento. En los estudios de impacto

ambiental no se han tenido en cuenta las afectaciones para las comunidades aledañas y no existe ningún tipo de prevención o compensación ambiental.

La multinacional usa la figura de “minería artesanal” para hacerse de un derecho de explotación bajo menores estándares de control. Cabe preguntarnos qué tipo de minería artesanal puede realizar una multinacional con intereses estratégicos supranacionales sobre estos minerales y, además, con proyección de construir una refinería de tierras raras en territorio colombiano. Tampoco es claro sobre quien recaerían las obligaciones derivadas de la licencia, sobre la empresa o la persona a la cuál compraron el predio, dejando un vacío sobre las responsabilidades que llegue a tener la empresa por afectaciones ambientales o sociales. (14)

### **Casanare: Caño Mochuelo y los conflictos de dos proyectos “ambientales”**

El Resguardo Indígena de Caño Mochuelo, ubicado en el departamento del Casanare, alcanzó en el 2010 una importante victoria: impidió en asamblea general la exploración de petróleo en su territorio. (15) Sin embargo, en la actualidad se encuentran debatiendo dos proyectos que tienen que ver con la ola de “economía verde” impulsada desde el gobierno de Iván Duque y profundizada en el de Gustavo Petro. Estos proyectos son: venta de créditos de carbono y uno de “reforestación” de 200 hectáreas con especies de eucaliptos.

El Resguardo de Caño Mochuelo es una situación bastante singular dentro de la pluriversidad cultural colombiana. En una extensión menor a 100.000 hectáreas se encuentran confinados diez pueblos distintos en 14 asentamientos, pueblos que tienen tradiciones nómadas o seminómadas y que han sido históricamente exterminados física y culturalmente. (16) Las comunidades cuentan con una Asamblea General como forma de gobernanza y participación. Sin embargo, en ocasiones, no se respeta la decisión de la Asamblea y termina siendo una sola persona quien decide por 14 comunidades.

### **Año 2022 - Proyecto de venta de bonos de carbono (CO2)**

Las comunidades que viven en el Resguardo de Caño Mochuelo han sido empobrecidas por la falta de atención y de oportunidades educativas y laborales, al tiempo que son víctimas de una multiplicidad de violaciones en su dignidad humana, reconocidas por el propio Estado colombiano en el proceso de reparación colectiva de víctimas del conflicto armado. (17)

Desde 2022, la empresa CO2CERO -a través de un particular, Henry Andueza Errunuma- ha promocionado un proyecto de venta de bonos (créditos) de carbono que se pretende implementar en el Resguardo. El acuerdo se suscribiría entre la empresa y Andueza, quien actuó como socio coordinador REDD+ en representación de nueve Resguardos indígenas, sin especificar el tipo de actividad por la cual se generarán los créditos de carbono (conservación, plantaciones de árboles, etc). En el sitio web de la empresa aparece un proyecto registrado bajo el nombre de Awia Tuparro +9, en el cual, si bien se mencionan varios territorios indígenas, no figura el Resguardo Caño Mochuelo (Proyectos de Carbono – CO2CERO).

En la socialización de este proyecto, los proponentes no han ejecutado el protocolo de consulta previa, libre e informada. Excusados en la naturaleza comercial del contrato, aseguran que es un

acuerdo de voluntades libres entre las partes. A pesar de existir herramientas como las salvaguardas sociales, ambientales e institucionales promulgadas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la práctica no existe un garante que haga cumplir los derechos mínimos de acceso a la información y de participación ciudadana por parte de las comunidades. (18)

El contrato tiene algunas particularidades que vale la pena mencionar:

- El contrato es un poder (contrato de mandato) en el que el Resguardo le otorga a un tercero la posibilidad de negociar en su nombre.
- El contrato tiene cláusulas de confidencialidad que afectan las salvaguardas sociales del acceso a la información
- El contrato define que es el Resguardo quien debe asumir las salvaguardas socio ambientales, en contravía de las obligaciones que tienen las empresas en este punto
  - A pesar de plantear que las inversiones están ligadas a los llamados “planes de vida”, actualmente las comunidades del Resguardo no cuentan con ellos. Un “plan de vida” es una herramienta elaborada por las propias comunidades para habitar el territorio desde su propia cultura e identidad, abarcando diversos ámbitos como el espiritual, político, ambiental y económico.
- Las cláusulas de incumplimiento que pesan sobre las comunidades ascienden a los \$ 100.000.000 (US 25,000)
- Si una vez hechos los estudios, al hacer el análisis no se considera viable el proyecto, los costos deben ser asumidos por el Resguardo Indígena.

La aprobación del proyecto de bonos de carbono no se hizo por el conducto regular de la Asamblea general del Resguardo sino por medio de una figura que no existe dentro de sus Estatutos: una mesa directiva con 14 autoridades, sin tener en cuenta la voluntad de las comunidades que en reiteradas asambleas ya habían manifestado sus reparos al proyecto.

A pesar de que la Asamblea general, en abril de 2024, decidió no continuar con este proyecto, el contrato ya había sido firmado por el Gobernador del Resguardo en diciembre de 2023, sin autorización de la Asamblea. Esto plantea un escenario difícil para poder desistir de este proyecto sin ninguna consecuencia legal.

## **Año 2024 - Proyecto de reforestación con eucaliptos**

En diciembre de 2023, el ex gobernador del departamento del Casanare Salomón Andrés Sanabria y el actual gobernador del resguardo de Caño Mochuelo acordaron de manera soterrada la reasignación de un dinero del Sistema General de Regalías. El recurso, que estaba destinado a infraestructura educativa de los colegios indígenas, fue reasignado para la “Implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad indígena Resguardo Indígena de Caño Mochuelo con la reforestación productiva en el municipio de Paz de Ariporo” (Código BPIN 2023100010060), por un monto de \$ 7.000.000.000 (US 1.700.000)

En este proyecto no se realizó la consulta previa o aprobación por parte de la Asamblea. Sólo hubo un documento personal firmado por el Gobernador del Resguardo. Existían documentos previos de concertación con los otros núcleos indígenas del departamento de Casanare, e internamente en Caño Mochuelo, se había determinado que el dinero que el Estado entrega a los Pueblos Indígenas por concepto de regalías tenía por destino la inversión en infraestructura educativa de los colegios indígenas del Casanare.(19) ¿Por qué entonces se modificó la decisión de las comunidades?

Este proyecto pretende la plantación de 200 hectáreas con eucalipto, en medio de la sabana del Casanare, argumentando que son eficientes para la “reconstrucción de bosques” y “la recuperación de la identidad indígena”. Sin embargo, son más que comprobados los impactos negativos de estos monocultivos. Uno de ellos es el alto consumo de agua, incluso en los niveles freáticos.

---

### **Más ejemplos del colonialismo y racismo del carbono en la Orinoquía**

**Mucho antes del Proyecto en Paz de Ariporo, inversionistas extranjeros de la empresa Forest First Colombia se apropiaron de 40 mil hectáreas en la región de Vichada para establecer una plantación de eucaliptos y hacer negocio con la venta de bonos de carbono. En una entrevista, sus representantes afirman que “en esta zona de Colombia, no solo no hay reservas de carbono en el suelo, sino que tampoco hay vegetación que retenga ese carbono”, agregando que el eucalipto, por el contrario, es “muy eficiente para tomar carbono del aire y almacenarlo en la madera”. En sintonía con el gobierno colombiano que considera la región como “vacía”, los representantes del proyecto afirmaron que “no están desplazando a la gente”. Sin embargo, acusan a las comunidades de base de destrucción ambiental, en lugar de a su propio monocultivo de eucalipto: “Las pocas personas que viven allí incendian el pastizal varias veces al año debido a las malas prácticas de manejo de la tierra”. (20)**

---

Irónicamente, dentro del estudio ambiental del proyecto en Paz de Ariporo se justifica la reforestación con eucaliptos con el objetivo de recuperar la identidad cultural de las comunidades indígenas, cuando en realidad no existe ningún tipo de relación cultural entre esos árboles de origen australiano y las comunidades de la Orinoquía.

Vale la pena traer a colación que si el objetivo del proyecto estuviera dirigido a fortalecer a los Pueblos Indígenas y no solo a los intereses de los capitales y contratistas amigos de los gobernantes de turno, la reforestación debió haberse planeado con múltiples especies de la familia de las arecáceas (palmas), que por su alta demanda y grave confinamiento de las comunidades, se han llegado a extinguir en el Resguardo.

Las arecáceas no solo constituyen la fuente más importante de materias primas para la construcción, manufactura de herramientas, ropas, artesanías, medicinas, consecución de alimento, etc, sino que están conectadas con un universo teológico que se entreteje con todos los otros organismos con los que se cohabita en la Orinoquía. La palma de moriche (*Mauritia flexuosa*) se distingue por tener complejas relaciones de asociación con múltiples especies, de allí que haya

sido nombrada especie clave para la vida. Caso similar sucede con la palma de seje (*Oenocarpus bacaba*), la palma real o cucurita (*Attalea maripa*), la palma de cumare (*Astrocaryum aculeatum*) y la palma de Assaí (*Euterpe oleracea*). (21) Es en estas especies de palmas y otras plantas donde se encarnan las sabidurías de los antepasados.

A pesar de estos hechos, las instituciones del Estado no asumen responsabilidades en los impactos ambientales ni en las garantías de derechos colectivos, así como la concertación adecuada, dejando a las comunidades desprovistas de un apoyo y acompañamiento del Estado.

## **Corporación Claretiana NPB (22)**

Andrés Tiboche y Daniel Ávila

- (1) Rausch, J. M. (1999). La frontera de los Llanos en la historia de Colombia : (1830- 1930) / Jane Rausch ; translation Nicolas Suescún. Santafé de Bogotá: Banco de la República, El Ancora
- (2) El resguardo Indígena es una figura político – administrativa, retomada de la época colonial que busca proteger el territorio de las comunidades indígena, con respeto de la autonomía y autodeterminación de estas comunidades, de acuerdo al acuerdo 169 de la OIT.
- (3) <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm>
- (4) Tal como se evidenció en el informe presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP por medio de la Red Llanos & Selva: “Etnocidio y Racismo Estructural en la Orinoquía”, en el 2021.
- (5) Desde la Corte Constitucional se ha reconocido a las comunidades indígenas “las territorialidades” como lugares que si bien no están dentro de su territorio delimitado oficialmente hacen parte de su cultura por las relaciones espirituales y culturales. SU 123 de 2008.
- (6) Editores. Gómez G., A. (1991). Indios, colonos y conflictos: una historia regional de los Llanos Orientales, 1870-1970 / Augusto Gómez G. Bogotá: Siglo XXI Editores, Pontificia Universidad Javeriana.
- (7) Consejo Nacional de Política Económica y Social, órgano encargado de asesorar los políticas económicas y sociales del país.
- (8) Se denomina tierras raras a un grupo especial de minerales que tiene un alto valor comercial para el desarrollo tecnológico.
- (9) DIARIO OFICIAL. AÑO CXLVIII. N. 48483. 6, JULIO, 2012. PÁG. 131. En: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=4007264>
- (10) Sentencia de Tutela T 766 de 2015  
<https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2016/06/sentencia-t-766-2015-1.pdf>
- (11) Rojas, I., Ospina, J. & González O. (2019) Vichada: Tierra Codiciada. En: TERRITORIO Y DESARROLLO 2019; Enero-Junio. Vol. 3, N°1. PP. 13-19.
- (12) [https://www.elespectador.com/investigacion/la-historia-no-contada-de-la-primera-mina-de-tierras-raras-en-vichada-colombia/#google\\_vignette](https://www.elespectador.com/investigacion/la-historia-no-contada-de-la-primera-mina-de-tierras-raras-en-vichada-colombia/#google_vignette)
- (13) [https://www.auxicoresources.com/\\_files/ugd/6f9bc0\\_4801a8ed522945498617f1d95afbfc12.pdf?index=true](https://www.auxicoresources.com/_files/ugd/6f9bc0_4801a8ed522945498617f1d95afbfc12.pdf?index=true)
- (14) Actualmente el gobierno colombiano está concertando con las comunidades indígenas la actualización del código de minas, sin embargo, hemos podido evidenciar que el tema de tierras raras no se ha tocado directamente y existe un gran desconocimiento de este tipo de proyectos.
- (15) <https://sistematizacioncm.wordpress.com/4-el-proceso-de-intervencion/el-proceso-de-intervencion/2010-2/> Art. 1 de la Res. 0171 del 2016 de la unidad para la atención y reparación de las víctimas. Define confinamiento como una situación de vulneración a derechos fundamentales, en la que las comunidades, pese a permanecer en una parte de su territorio, pierden la movilidad, como consecuencia de la presencia y

accionar de grupos armados ilegales. Esta restricción implica la imposibilidad de acceder a bienes indispensables para la supervivencia derivada del control militar, económico, político, cultural y social que ejercen los grupos armados ilegales en el marco del Conflicto armado interno.

(16) Auto 098 de medidas cautelares, en el marco de reparación colectiva de víctimas del conflicto armado, existe un proceso de reparación colectiva por parte del Estado Colombiano, en este contexto se dicta una medida cautelar (figura jurídica de prevención para evitar generar daños mayores a los ocasionados)

(17) En el desarrollo del presente artículo, la Corte Constitucional de Colombia a través de la sentencia T 248 de 2024 da cuenta de estas vulneraciones de los derechos colectivos de las comunidades, así como la omisión del Estado Colombiano en aplicar un enfoque étnico en el mercado voluntario de REDD+

(18) El Sistema General de Regalías (SGR) es un mecanismo que busca garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables del país.

(19) <https://dfc.gov.medium.com/a-q-a-with-forest-first-colombia-ceo-tobey-russ-and-cfo-jonathan-dodd-on-climate-change-mitigation-06e33921cd4d>

(20) Schultes, R. E. (1974). Palms and religion in the northwest amazon / Richard Evans Schultes. Cambridge: Harvard University.

(21) Organización que acompaña por más de 20 años a las comunidades indígenas de la Orinoquía

## **Camerún: ¡La resistencia contra la replantación de monocultivos de palma por parte de SOCAPALM es fértil!**

**La empresa está en proceso de renovar parte de sus plantaciones de palma aceitera en Edéa. A finales del año pasado, las comunidades comenzaron a movilizarse contra este proceso. Su resistencia y determinación para detener a la empresa ha llevado al subprefecto a solicitar a Socapalm el cese de sus actividades. Esta es una primera victoria de la comunidad y de las mujeres organizadas de Edéa, pero ¡la lucha continuará hasta que SOCAPALM devuelva las tierras a las comunidades!**

SOCAPALM es el nombre de una empresa que controla cerca de 60.000 hectáreas de plantaciones industriales de palma aceitera en Camerún. Fue una empresa estatal hasta el año 2000, cuando fue privatizada y adquirida por la empresa agroindustrial SOCFIN, propiedad principalmente del grupo francés Bolloré, controlado por la familia Bolloré y la familia Huber Fabri de Luxemburgo. El Banco Mundial jugó un papel clave en la historia de cómo el conglomerado SOCFIN y el puñado de familias multimillonarias europeas que controlan esta empresa se beneficiaron de la compra de SOCAPALM. (1)

Actualmente, la empresa está en proceso de renovar parte de sus plantaciones de palma aceitera en Edéa con el fin de mantener y aumentar aún más su productividad y, por lo tanto, sus ganancias.

A finales del año pasado, las comunidades de Edéa comenzaron a movilizarse contra este proceso. En particular, las mujeres de uno de los pueblos que se organizaron en la Asociación de (Mujeres) Vecinas de Socapalm en Edéa, AFRISE, por su sigla en francés.

Lanzaron una petición (2) pidiendo la solidaridad internacional a su reclamo de detener la replantación llevada a cabo por SOCAPALM y alertando que estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para detener las actividades de SOCAPALM en Edéa. Declararon que “no aceptaremos pasar los próximos 50 años en esta miseria. Estamos decididas a luchar para liberar nuestras tierras y obtener espacios de vida para nuestros hijos, las generaciones presentes y futuras”.

Alertadas por el hecho de que a principios de este mes ya habían comenzado a replantar en algunos pueblos, la Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera en África Occidental y Central, un colectivo de comunidades y activistas que lucha contra la expansión de las plantaciones en África, publicó una declaración en apoyo de las comunidades.

En el comunicado (3), la Alianza Informal dice que “instamos a Socapalm a detener inmediatamente la replantación de monocultivos palma aceitera en las proximidades de las casas y tumbas de las comunidades que viven en Apouh à Ngog, la cual viene llevando a cabo desde el miércoles 8 de agosto de 2024. La plantación de decenas de miles de hectáreas de palmeras frente

a los patios de estos residentes locales es un grave atentado contra la soberanía alimentaria de las familias del pueblo y contra la dignidad de las mujeres de Apouh à Ngog, en el distrito de Edéa 1 de Camerún”.

La resistencia de la comunidad y su determinación para detener a la empresa ha llevado al subprefecto a solicitar a Socapalm el cese de sus actividades.

Esta es una primera victoria de la comunidad y de las mujeres organizadas de Edéa, pero ¡la lucha continuará hasta que SOCAPALM devuelva las tierras a las comunidades!

(1) <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/el-legado-perenne-de-un-proyecto-poco-conocido-del-banco-mundial-que-le-aseguro-las-plantaciones>

(2) <https://www.wrm.org.uy/es/alertas-de-accion/apoyemos-a-las-mujeres-de-camerun-que-resisten-a-los-monocultivos-de-palma-aceitera>

(3) <https://www.wrm.org.uy/action-alerts/stop-socapalms-replanting-operations>

## Argentina: Lucha comunitaria frente a la contaminación de los aserraderos en Corrientes

**La provincia de Corrientes concentra la mayor superficie de plantaciones forestales del país. El 80% de la madera se destina a los aserraderos. Allí, se queman periódicamente montañas de aserrín, lo que genera graves problemas para la vida y la salud de los vecinos. La organización local Guardianes del Y'verá realizó un relevamiento de salud comunitario para denunciar la problemática, exigir la relocalización de estos establecimientos y denunciar los impactos del modelo forestal.**

Nubes negras de humo y polvillo obligan a las familias de Concepción, en la provincia argentina de Corrientes, a encerrarse en sus casas periódicamente. La quema de aserrín en los siete aserraderos de esta localidad de 26 mil habitantes provoca problemas respiratorios y reacciones en la piel. Entre los más afectados se encuentran niños y personas mayores. Sin embargo, las autoridades locales no toman medidas para detener esta contaminación, en una actitud que demuestra que para ellas los intereses económicos del sector forestal son más importantes que el bienestar de la comunidad.

Ante esta situación, la organización socioambiental Guardianes del Y'verá decidió realizar un relevamiento de salud en las viviendas cercanas a los aserraderos. Las encuestas se realizaron en noviembre de 2023 en los barrios Caaby Guazú, 30 viviendas y 36 viviendas. “El 35 por ciento de los encuestados detectó problemas de salud que asocian a los aserraderos, como el desarrollo de alergias y problemas respiratorios llegando a casos de asma y enfermedades dérmicas”, comunicó la organización.

“Los más afectados son los niños”, relata Araceli Romero, vecina de Concepción e integrante de Guardianes del Y'verá, quien participó del relevamiento. “Después de las quemas, en el hospital se ven niños con problemas respiratorios o en la piel. La problemática es muy evidente”, señala la activista, quien además es enfermera.

Corrientes es la provincia Argentina con mayor superficie de monocultivos de árboles del país, con entre 434.000 y 500.000 hectáreas plantadas, en su mayoría pinos y eucaliptus. Los datos difieren según la fuente: la Secretaría de Agricultura de la Nación informa que son 437.803 las hectáreas plantadas hasta marzo de 2024, mientras que la Asociación Forestal Argentina (AFOA), que reúne a las principales empresas del sector, afirma que son más de 500 mil. De acuerdo a los datos del Gobierno nacional, el 80 por ciento de la madera se destina a los aserraderos. (1)

La localidad de Concepción está ubicada en el departamento que lleva el mismo nombre, a las puertas de los Esteros del Y'verá, uno de los humedales más grandes de América, amenazado entre otras actividades, por el monocultivo forestal. (2) El departamento cuenta con 39.500 hectáreas de monocultivo, en su mayoría de pinos. El trabajo en las plantaciones y los aserraderos -en su mayoría en condiciones muy precarias y peligrosas- es una de las pocas salidas laborales que se le ofrece a la población.

Las plantaciones forestales en la Argentina aumentaron de manera significativa a partir de 1998, con la sanción de la Ley 25.080, de promoción de “bosques cultivados”. La normativa otorga subsidios (como acceso a “apoyos económicos no reintegrables”) y enormes ventajas impositivas: exención de impuestos y estabilidad fiscal de 30 a 50 años (es decir, que no se aumenta ni se agrega ningún impuesto durante ese período). En Corrientes, esta política se tradujo en un aumento de más del 200 por ciento de la superficie con monocultivos de pino y eucalipto entre 1994 y 2019.(3)

## **Plantaciones y aserraderos: falsa promesa de progreso**

Lejos de mejorar la situación económica y social de las comunidades de Corrientes, el avance de los monocultivos de pinos y eucaliptos trajo graves consecuencias: desplazamiento de familias campesinas -cuyas tierras son invadidas por las plantaciones-, contaminación del ambiente por el uso de agrotóxicos, consumo de agua y aumento de incendios.

A estos impactos, se suman los de los aserraderos, que se ubican en los centros urbanos y afectan, sobre todo, a quienes viven en los barrios cercanos. Todas las semanas, en estos lugares prenden fuego a las montañas de aserrín que se acumulan como residuo de la actividad. De acuerdo al relevamiento realizado por Guardianes del Y’verá, además de los problemas de salud ocasionados por el humo y el polvillo, las familias se ven afectadas por los ruidos molestos. Sumado a ello, en el 25 por ciento de los hogares denunciaron la precarización de los trabajadores de los aserraderos, además de casos de accidentes laborales graves.

“En este pueblo, el Estado está muy ausente”, explica Araceli. “No hay trabajo y, lamentablemente, hay chicos que tienen que dejar la escuela secundaria para ir a trabajar a los aserraderos donde exponen su salud al polvillo que aspiran constantemente”. Y agrega: “En muchos casos no cuentan con seguridad para trabajar y algunos sufren amputaciones por las maquinarias”.

Otra práctica peligrosa y contaminante es el relleno de humedales con aserrín, realizado por los aserraderos o por el municipio, en especial cuando hay sequía. En épocas de incendios, cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático y el modelo forestal, la presencia de aserrín en los humedales lindantes con los barrios aumenta el riesgo de que el fuego alcance las casas. Lejos de ser un cortafuego, el humedal se vuelve combustible.

## **La lucha de la comunidad**

Para Guardianes del Y’verá, los relevamientos sanitarios realizados por activistas de la propia comunidad son una herramienta en la lucha contra los monocultivos forestales y el agronegocio. Previo a esta experiencia, ya habían realizado otro relevamiento en Mburucuyá, 50 kilómetros al norte de Concepción. Allí, el uso de agrotóxicos en las plantaciones de cítricos y tomates genera gravísimos problemas sanitarios. En 2017, una niña de nueve años, Rocío Pared, murió por intoxicación al comer una mandarina envenenada que cayó de un tractor. Pasados siete años, el crimen sigue impune, por lo que familiares y organizaciones [reclaman justicia](#).

“Asociamos los relevamientos comunitarios a nuestra lucha porque éstos se centran en lo que sabe y dice la gente que vive en el lugar”, explica Cristian Barrionuevo, otro de los integrantes de Guardianes del Y’verá. Además de recabar información para visibilizar las problemáticas, durante

los relevamientos, las vecinas y vecinos expresan otras preocupaciones y en muchos casos, quedan en contacto con las y los activistas comunitarios para hacer consultas o denunciar otros hechos de contaminación.

En este caso, el relevamiento vinculado a los aserraderos sirvió para demostrar que no es viable que éstos establecimientos continúen operando cerca de las viviendas. Al mismo tiempo, quedó demostrado, una vez más, que el modelo forestal no trae los beneficios prometidos a la población, sino todo lo contrario.

Ante ello, Guardianes del Y'verá exige la relocalización de los aserraderos fuera de los pueblos y ciudades, y continua con la denuncia de los impactos del modelo foresto industrial: “Desde Guardianes continuamos exigiendo la mudanza de los aserraderos fuera de las localidades y reclamando por las consecuencias del modelo foresto industrial que generan estos problemas y otros graves, como pasó en los meses de sequía extrema, cuando hubo grandes incendios en Corrientes, muchos las localidades de Concepción y Santa Rosa, agravados por los rellenos de humedales con aserrín, generando un peligro de fuego para todas las viviendas”.

### **Guardianes del Y'verá, Corrientes, Argentina y el Secretariado Internacional del WRM.**

(1) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tablero de Foresto Industria:

<https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/desarrollo-foresto-industrial/foresto-industria/tablero.php>

(2) [Boletín WRM, Monocultivos, pobreza y falsas soluciones: El legado de Harvard en la Argentina](#), julio 2023

(3) Baruzzo, M; Smichowski, H. y otros. Plantaciones Forestales: crecimiento y expansión de la actividad forestal en las Lomadas Arenosas en Corrientes, Argentina. Universidad Nacional de Formosa, 2020:

<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/162643>

# DE LOS ARCHIVOS DEL BOLETÍN DEL WRM

## **Para releer: Una reflexión desde África: hay que vencer el miedo para construir movimientos más fuertes**

Varios artículos del boletín actual dan cuenta de las luchas comunitarias contra viejas y nuevas formas de extractivismo que amenazan los territorios y los medios de vida de las comunidades en América Latina, África y Asia. Por tal motivo recomendamos releer una entrevista con el miembro del Comité Asesor del WRM Nasako Besingi, de Camerún, sobre los desafíos que enfrentan las comunidades. Desde una perspectiva africana, reflexiona no solo sobre la resistencia a los proyectos de empresas y estatales que afectan los territorios sino también sobre los desafíos para construir un movimiento más fuerte dentro de los países y a través de las fronteras. La entrevista, publicada en 2018 en el Boletín 241 del WRM, [está disponible aquí](#).

## RECOMENDADOS

### **Nueva publicación: Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: tácticas que utilizan las empresas de aceite de palma para apoderarse de las tierras comunitarias.**

#### **Versión resumida**

Recientemente, la Alianza Informal contra las plantaciones industriales de palma aceitera en África occidental y central publicó una nueva versión resumida de la cartilla “Promise, divide, intimidate, and coerce: Tactics palm oil companies use to grab community lands. Summary Edition” (Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: tácticas que utilizan las empresas de aceite de palma para apoderarse de las tierras comunitarias). Esta nueva edición consiste en una colección de más de 20 tácticas que utilizan las empresas de palma aceitera para apoderarse de las tierras de las comunidades para expandir las plantaciones. Es el resultado de muchos años de experiencia de activistas comunitarios y grupos de base que han estado luchando para resistir la apropiación de las tierras comunitarias por parte de las empresas. Aunque el enfoque se centra en las tácticas de las empresas de palma aceitera, existen numerosas similitudes con otras industrias y sectores involucrados en el acaparamiento de tierras y el extractivismo. La cartilla está disponible en [francés aquí](#) y en [inglés aquí](#). Si creen que el folleto también podría ser útil en otros idiomas, ¡no duden en hacérselo saber! La versión larga, de 2018, está disponible aquí: [francés](#) / [inglés](#).

### **Argentina: Reclamo de justicia por el desalojo de familias campesinas por parte de Arauco**

El pasado 5 de julio, 2024, tres familias campesinas fueron violentamente desalojadas en el Paraje San Lorenzo 2, en el municipio de Wanda, en la provincia argentina de Misiones. El desalojo fue llevado a cabo por la Policía provincial, en colaboración con la multinacional Arauco. Durante el operativo, [destruyeron la chacra de diez hectáreas](#) que era el sustento de las familias desde hacía una década. Derrumbaron y quemaron las casas, los cultivos, gallineros y chiqueros. Las familias perdieron todo, y algunos de sus integrantes pasaron hasta tres días detenidos. Organizaciones campesinas e indígenas reunidas en el “Grupo de lucha por el derecho a la tierra” [presentaron un pedido al gobierno](#) de Misiones para que de manera urgente devuelvan u otorguen otras tierras a

las familias desalojadas. Hasta fines de agosto, no habían tenido respuesta. Arauco, [que opera en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay](#), desembarcó en Misiones en 1996, cuando compró la planta de celulosa Alto Paraná. Desde ese momento, la multinacional avanzó sobre más de 200 mil hectáreas de tierras campesinas e indígenas con la plantación de monocultivos de pinos y eucaliptos, desplazando comunidades y generando graves impactos en la salud, el ambiente y la soberanía alimentaria. Ante ello, las comunidades llevan adelante una [histórica lucha de resistencia](#).

### **El proyecto de desarrollo alimentario y energético en Merauke amenaza a los pueblos indígenas y los bosques de Papúa**

El 23 de julio de 2024, el presidente indonesio Jokowi plantó la primera caña de azúcar de otro megaproyecto en la regencia de Merauke, en la provincia de Papúa del Sur. Según afirma, el proyecto ayudará a abordar las crisis alimentaria y climática mundiales. Pero lo que parece ser es otro desastroso proyecto a gran escala que se ha puesto en marcha en Indonesia y Papúa –como el fallido [proyecto MIFEE](#)– y que pone en peligro los medios de vida de los pueblos que dependen de los bosques. Las organizaciones Pusaka y LBH Papúa denuncian el último megaproyecto propuesto, entre otras cosas, por el acaparamiento fraudulento de tierras en el que participan 38 empresas privadas; la militarización de la región; el desprecio por los derechos de los pueblos indígenas y la presión sobre ellos para que acepten el proyecto, y la ausencia de estudios sociales y ambientales sobre el impacto del proyecto. Por más información, pueden consultar en [inglés aquí](#) y en [indonesio aquí](#).

### **RD Congo: Se reconoce el derecho de los indígenas Batwa a regresar a sus tierras ancestrales dentro del Parque Nacional Kahuzi-Biega tras décadas de lucha**

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos hizo pública recientemente su histórica sentencia sobre el derecho de los pueblos indígenas Batwa a regresar a su hogar ancestral, del que fueron expulsados violentamente cuando se creó el Parque Nacional Kahuzi-Biega en el este de la República Democrática del Congo. Fueron unos 6.000 Batwa quienes quedaron sin tierra cuando su tierra ancestral fue declarada área protegida en la década de 1970. No recibieron ninguna compensación y se enfrentaron a décadas de severa discriminación, privaciones y abusos. “Hemos sufrido tanto y durante tanto tiempo, ahora la comunidad merece volver a su tierra y que se respeten sus derechos”, dice un Batwa citado en un comunicado de prensa de una ONG sobre la decisión. Por más información en inglés, pueden [consultar aquí el artículo de REDD-Monitor](#) con enlaces al informe de Minority Rights Group y enlaces a la decisión de la ACHPR. Por información [en francés, pueden consultar aquí](#). Por información [en español, pueden consultar aquí](#).

**Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos con la siguiente fuente: Boletín 271 del Movimiento Mundial por los Bosques tropicales (WRM): “Comunidades en resistencia al extractivismo: de la bioeconomía a los monocultivos y la minería” (<https://wrm.org.uy/es/>)**

**[Suscríbete al Boletín del WRM](#)**

*El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques.  
La suscripción es gratuita.*

**¿Te perdiste la edición anterior del boletín del WRM  
“Plantaciones de árboles para el mercado de carbono: más injusticias para las comunidades y sus  
territorios”  
Puedes acceder a todas las ediciones pasadas del boletín del WRM en este link**

**Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)**

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

**Secretariado internacional del WRM**

Av. Bolivia 1962 Bis, CP 11500 Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943

[wrm@wrm.org.uy](mailto:wrm@wrm.org.uy)

<http://wrm.org.uy/es>